

ANDALUCÍA

Ibercaja reabre el desalojo forzoso de La Utopía

EL PAÍS, Sevilla

Ibercaja, propietaria del bloque de viviendas ocupado irregularmente en la avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla, ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción 3 solicitando “el desalojo forzoso” del edificio “al no haberse cumplido los compromisos por parte de los ocupantes”, que organizaron en él la llamada corrala La Utopía.

La propiedad aceptó en junio que no se ejecutara el desahucio que había reclamado por un pacto entre ambas partes para la búsqueda de soluciones a las familias que acreditasen un estado de verdadera “necesidad”, el desalojo “efectivo” de los pisos ocupados, la suspensión de la petición de medida cautelar de desahucio y el “desistimiento del proceso penal instado”.

En julio, la propiedad del edificio reiteró la “solicitud de desalojo forzoso al no haberse cumplido por parte de los ocupantes los compromisos”. “Únicamente tres familias han facilitado la evaluación de los Servicios Sociales para acreditar una situación de necesidad”, alega la entidad, informó ayer *El Correo de Andalucía*. Las familias lo niegan.

Dos rectores andaluces rechazan el apadrinamiento

EL PAÍS, Sevilla

Los rectores de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) rechazaron ayer que particulares “apadrinen” a estudiantes sin recursos, una propuesta que lanzó la semana pasada su colega de Málaga, Adelaida de la Calle.

El rector de Jaén, Manuel Parras, consideró que el “apadrinamiento como tal es una especie de beneficencia” y “un sistema universitario sólido no tiene que estar a la opinión o a la decisión de determinadas personas”. “Son bienvenidos todos los mecenazgos que haya”, pero el rector discrepó de que sea “un tema en el que se pueda apoyar a unos estudiantes y a otros no”. Por eso pidió que las donaciones se incorporen “en los mecanismos que cada universidad tiene de apoyo” a los alumnos.

Juan Manuel Suárez Japón, rector de la UNIA, reclamó a los poderes públicos la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades en la educación, “sin buscarla en formas sucedáneas de caridad o filantropía privadas”.

Pedanías de Jerez estudian desligarse de la privatización del agua

Tres entidades locales alegan que la gestión pública abarataría un 25% el recibo

ANA HUGUET
Jerez

La multinacional Aqualia puede perder más de 8.000 clientes solo cinco meses después de que el Ayuntamiento de Jerez (PP) privatizara la gestión del agua durante 25 años por un canon de 80,1 millones a pagar en dos anualidades. Tres de las pedanías del municipio (Guadalcaín, Estella y Torreceira) decidirán en dos semanas si se desvinculan de la gestión privada de Aquajerez para que sea una empresa pública de la mancomunidad de municipios de la sierra de Cádiz la que asuma el suministro. Los tres alcaldes pedáneos ya han iniciado los trámites para recuperar el modelo público. Una vez que reciban la documentación requerida a la entidad Aguas de la Sierra, celebrarán las juntas vecinales para, entonces, aprobar en los plenos mu-

nicipales la ruptura con Aqualia.

La ley de autonomía local recoge, desde 2010, que cada entidad local autónoma (ELA) tiene las competencias en agua y alcantarillado y, por tanto, la capacidad de decidir sobre su gestión. Unos meses después de que el gobierno de la alcaldesa María José García Pelayo haya consumado la privatización de la gestión del servicio en Jerez, los tres regidores pedáneos ya han consultado los resultados de varios estudios económicos que certifican que la gestión pública abarata de manera notable el recibo. El informe más contundente lo ha emitido Aguas de la Sierra, que concluye, según constata su presidente, Pepe Holgado, que el recibo para los más de 8.000 vecinos se reduciría entre un 20% y un 25%.

La empresa pública Aguas de la Sierra suministra agua a más de 20.000 habitantes de 14 muni-

cipios de la serranía gaditana y cerró 2012 con unos beneficios, según Holgado, de 538.000 euros, que se dedican a nuevas inversiones en la red de abastecimiento. Con la adhesión de las tres pedanías mencionadas el ente sumaría unos 8.500 nuevos usuarios a los que se podrían añadir los más de 4.000 habitantes de la ELA de La Barca de la Florida, cuyo alcalde, del PP, también estudia desvincularse de Aqualia.

Al desvincularse de Aqualia, el alcalde independiente de Torreceira, la regidora de Guadalcaín (Unión Rural Jerezana) y el de Estella (PA) renuncian a ingresar la parte proporcional —según población— del canon de 80,1 millones que ingresa Jerez por la cesión del servicio hasta 2038.

La posible pérdida de abonados no es el único problema al que se enfrenta Aqualia desde que asumió la gestión del servicio

en Jerez. Facua presentará ante la Junta desde esta semana denuncias contra la compañía por fallos en el cobro del recibo. La falta de conciertos de la empresa con varios bancos ha obligado a los usuarios a soportar colas de varias horas en las oficinas para abonar recibos devueltos. El problema afecta a unos 5.000 titulares, a los que la multinacional ya ha remitido una carta en la que se alerta de un corte de suministro si no abonan en la ventanilla de la firma la factura devuelta.

Se añade otro problema. La compañía ha suprimido el concierto con otra entidad colaboradora, Correos, donde se cobraban miles de recibos a personas que rechazan domiciliar el pago. Para evitar más colapsos en sus oficinas, Aqualia ha iniciado una campaña para que unos 15.000 clientes asocien una cuenta corriente en la que cargar los recibos.



Empleados municipales de La Línea, durante la protesta de ayer cerca de Gibraltar por los impagos de sus nóminas. /A.CARRASCO RAGEL (EFE)

Los empleados de La Línea reclaman el pago de las nóminas junto a Gibraltar

Los funcionarios calculan que la deuda con la plantilla es de 12 millones

C. ROMAGUERA, Algeciras

Un centenar de empleados de La Línea (Cádiz) secundó ayer la convocatoria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar al Ayuntamiento el pago de las diez nóminas que adeuda a la plantilla el gobierno de la socialista Gemma Araújo y que ascienden a 12 millones de euros.

La protesta se desarrolló durante 25 minutos en las inmediaciones de la aduana entre La Línea y Gibraltar para llamar la atención sobre la atención prestada a este conflicto y la nula repercusión de la precaria economía municipal.

En este sentido, y tras la apertura de una oficina de quejas sobre los perjuicios de los controles en la aduana a los estableci-

miento locales, el portavoz de CSIF en el Consistorio linense, Eduardo Izaguirre, afirmó que los 12 millones de euros de deuda es “un dinero que no está circulando y que también perjudica al comercio y la hostelería”.

Izaguirre calificó de “insostenible” la situación para los más de 800 empleados municipales y denunció “presiones y amenazas desde el gobierno municipal” pa-

ra que los trabajadores no acudiesen a la concentración convocada en los accesos a Gibraltar. El sindicato de funcionarios ha convocado una asamblea de trabajadores para el próximo miércoles para acordar nuevas protestas.

La alcaldesa linense anunció el abono de la nómina completa del mes de marzo y gestiones con la Diputación para adelantar más pagos.